

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)**

Apelación auto

Exp. 2019-0456

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, vencido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede a dictar la decisión interlocutoria correspondiente en este proceso instaurado por BEATRIZ ELENA SALAZAR ARANGO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (Rad. 05001-31-05-018-2019-00456-01).

**ANTECEDENTES:**

En el juicio de la referencia, el Juzgado de conocimiento, que lo es el Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, por auto del día 22 de septiembre de 2020, dictado en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, declaró no probada la excepción previa de cosa juzgada propuesta por los apoderados de las partes demandadas. Luego de hacer referencia a los artículos 32 del CPTSS y 303 del C.G.P., sostuvo que aunque si bien de la confrontación de las demandas presentadas y de la decisión que se tomó en la primera de ellas, podía afirmarse identidad de partes e identidad de causa, no podía afirmarse lo mismo de la identidad de objeto, pues en el primer proceso se solicitó la nulidad del traslado y en este se pide es la ineficacia.

Contra dicha decisión, la apoderada de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., interpuso el recurso de apelación,

el cual le fue concedido en el efecto suspensivo y es el motivo por el cual conoce esta Sala de Decisión Laboral. Invocando el derecho a la igualdad y algunas decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la SL3464 de 2019 y SL1688 del mismo año, sostiene como ha ocurrido en infinidad de casos donde se solicita la nulidad y se falla en ineficacia, que aquí la decisión debe ser igual, pero para declarar probada la excepción de cosa juzgada (archivo 01, tiempo 13:38 a 16:48).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES:

Ciertamente, como a bien tuvo en advertirlo la *a quo*, la cosa juzgada encuentra su regulación legal en el artículo 303 del C.G.P, el cual en su parte pertinente dice:

*“... La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”*

Por tanto, para que pueda afirmarse la existencia de este medio exceptivo se exige, de manera perentoria y categórica la presencia de tres identidades básicas: objeto (eadem res), causa petendi (eadem causa) y partes (eadem conditio personarum).

La doctrina, al ocuparse de estos elementos, anota:

*“El punto de partida en esta materia es el de que, por principio, la cosa juzgada alcanza tan sólo a los que han litigado; quienes no han sido partes en el juicio anterior no son afectados por ella... Por lo pronto, parece indispensable destacar que cuando se habla de **objeto** en la cosa juzgada, se alude al bien jurídico disputado en el proceso anterior. No se trata, en nuestro concepto, del derecho que se reclama... La jurisprudencia ha acogido reiteradamente la idea de la doctrina de que la **causa petendi** es la razón de la pretensión o sea el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”*(Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1988, págs. 422, 433 y 435).

Al momento de decidir la excepción previa de que se habla, la falladora de primer grado concluyó, y esta Sala no cuestiona tales afirmaciones porque encuentran debida prueba que las respalde, que en ambos juicios las partes son las mismas y

la causa de las pretensiones idénticas, pero que no advertía la identidad de objeto, pues mientras en el proceso inicial se solicitaba la nulidad, en este se pide es la ineficacia, fenómenos jurídicos con sustanciales diferencias. Para estas afirmaciones se basó en la demanda presentada en este proceso (fls. 4 y siguientes) y en la que obra a folios 187 a 192, debidamente fallada y obrantes los fallos de primera y segunda instancia a folios 187 y siguientes (todos estos documentos del archivo 1).

Esta conclusión frente a la no identidad del objeto no la comparte esta Sala de Decisión Laboral, pues si bien se repara en las pretensiones de ambos procesos, lo que en última instancia se solicita es que se deje sin efectos el traslado de régimen pensional, sin que revista importancia o significación, el que se hable de nulidad o ineficacia. El profesor Eduardo J. Couture en el texto inicialmente transcrito es claro en afirmar que la identidad de objeto no busca identidad literal de las súplicas, sino del BIEN JURÍDICO PERSEGUIDO, y este, como quedó dicho, no es otro distinto al de dejar sin efectos la decisión de traslado de régimen pensional por falta de una debida información, y que se regrese a la demandante del régimen de ahorro individual al régimen de prima media.

No cosa distinta se colige de lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL3464 de 2019 (Rad. 76284), en donde si bien es cierto se privilegió la ineficacia, no queda duda que partió de las reglas de la nulidad. Textualmente dijo:

***1. La reacción jurídica al incumplimiento del deber de información es la ineficacia***

*En sentencia CSJ SL1688-2019 la Corte precisó que la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia o exclusión de todo efecto al traslado. Por ello, el examen del acto de cambio de régimen pensional, por transgresión del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto.*

*En la citada providencia, la Corte recordó que la ineficacia se caracteriza porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, es decir, este instituto excluye o le niega toda consecuencia jurídica. Según este concepto, la sentencia que declara la ineficacia de un acto no hace más que comprobar o constatar un estado de cosas (la ineficacia) surgido con anterioridad al inicio de la litis.*

*Igualmente, recordó la Corte que este instituto tiene una finalidad tuitiva y de reequilibrio de la posición desigual de ciertos grupos o sectores de la población que concurren en el medio jurídico en la celebración de actos y contratos. De ahí que en los últimos años haya tenido un desarrollo vertiginoso en legislaciones tutelares,*

*caracterizadas por la protección a ciertos grupos vulnerables, o que, por distintas razones, se encuentran en un plano desigual frente a su contratante. En estos sectores, el Estado interviene para salvaguardar la autonomía de las personas, reducir el desequilibrio negocial o evitar abusos de las posiciones dominantes de grupos económicos. Un ejemplo de ello es el derecho del trabajo<sup>1</sup>, la legislación de protección al consumidor<sup>2</sup> o del consumidor financiero<sup>3</sup>.*

## **2. Las consecuencias prácticas de la ineficacia**

*En la medida en que el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Sala en la sentencia CSJ SL1688-2019 explicó que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda (vuelta al statu quo ante). Con asidero en este argumento, la Sala Civil de esta Corporación igualmente ha afirmado que «cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás» (CSJ SC3201-2018).*

*Ahora bien, como el precepto que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades es el artículo 1746 del Código Civil y este por analogía es aplicable a la ineficacia, la Sala se apoyará en él para dilucidar el problema planteado:*

*La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre objeto o causa ilícita.*

*Según este artículo, declarada la ineficacia, las partes, en lo posible, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia ex tunc (desde siempre).*

Siendo ello así, la conclusión no puede ser otra diferente que la de declarar probada la excepción propuesta y, como consecuencia, ordenar el archivo del proceso.

Las costas de las instancias estarán a cargo de la parte demandante (art. 365-4 del C.G.P.). Como agencias en derecho en esta se fija la suma de \$100.000.00.

---

<sup>1</sup> El artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo refiere que «No produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca» el mínimo de derechos laborales.

<sup>2</sup> Los artículos 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011 «Estatuto del Consumidor», privan de efectos, de pleno derecho, a las cláusulas abusivas incluidas en los contratos celebrados con los consumidores.

<sup>3</sup> De acuerdo con el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el contenido de las pólizas debe "ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente Estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva".

## DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, la Sala Cuarta de Decisión Laboral, REVOCA el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas y, en su lugar, DECLARA probada la excepción de cosa juzgada. Archívese el proceso.

Costas de las instancias a cargo de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$100.000.oo.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 73 fijados el 30 de abril de 2021  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.